

Gentili, Pablo (2007) "Educación, exclusión social y negación de derechos en América Latina" En: *Desencanto y utopía. La educación en el laberinto de los nuevos tiempos. Primera Parte*. Rosario. Homo Sapiens Ediciones; pp. 41-49

CAPÍTULO II

Educación, exclusión social y negación de derechos en América Latina

Buenos Aires, 24 de diciembre. Son las nueve y media de la noche. La ciudad vive la tensión de los minutos previos al encuentro navideño. Casi todos corren apurados. Muchos llevan paquetes envueltos en magníficos papeles de colores. Dos parejas disputan el único taxi libre que todavía circula por La Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. En la esquina de las calles Juncal y Suipacha, la Iglesia del Socorro está absolutamente llena. Allí, la misa de Navidad congrega centenas de fieles, muchos de los cuales pertenecen a distinguidas familias de la sociedad porteña. Visten ropas elegantes y lucen joyas finas. Las de siempre, aunque esa noche sus colores parecen más brillantes. Dentro y fuera de la iglesia se han formado dos largas hileras. Una se desplaza lenta y ordenadamente por la nave central. Las flores, los cantos, las velas y la imponencia del altar hacen más conmovedora la espera para recibir la comunión. Del lado de afuera, otra fila, menos organizada aunque no menos numerosa, se mantiene inmóvil en el lateral derecho de la iglesia. Son mujeres y hombres de casi todas las edades. Muchos cargan niños; casi todos, bolsas y paquetes, aunque sin magníficos papeles de colores. Ninguno lleva regalos. Hacen fila y esperan con el mismo respeto con que los comulgantes esperan su turno para recibir el cuerpo de Cristo. A diferencia de éstos, no cantan. Sus ropas lucen gastadas, rotas, sucias y no tienen anillos, pendientes o collares luminosos. Son pobres y, aunque ese día son muchos más, su presencia se ha hecho familiar en el selecto barrio

de La Recoleta. Los pocos que ocasionalmente dicen algo reclaman que, esta vez, la noticia ha circulado con muchísima velocidad. Algunos comentan que viajaron más de tres horas para llegar hasta allí. Otros se quejan. Dicen que siempre en esas fechas aparecen un montón de aprovechados. La misa termina. Los de adentro salen. Los de afuera esperan. En pocos minutos, todos tendrán su cena de Navidad.

Una herencia de pobres, muy pobres

América Latina es la región más injusta del planeta. En ella, la diferencia entre ricos y pobres se multiplica y amplía, creando un abismo cuya profundidad parece ser hoy insalvable para gran parte de la población.

El 43,4% de los latinoamericanos y latinoamericanas es pobre y el 18,8% muy pobre. Una distinción que, más allá de las sutilezas sociológicas, diferencia a quienes enfrentan graves dificultades para vivir con dignidad de aquellos que, simplemente, tienen graves dificultades para sobrevivir. Durante los últimos cinco años, estos índices se han mantenido estancados, lo cual, obviamente, está lejos de ser una buena noticia. Existen hoy, en América Latina, algo más de 220 millones de pobres, de los cuales 95 millones son indigentes; o sea, muy, pero muy pobres. Las diferencias entre países sólo reflejan situaciones de un dramatismo fronterizo con el horror. En Argentina, por ejemplo, la pobreza casi se duplicó entre 1999 y 2002, pasando del 23,7% al 45,4% del total de la población. La indigencia triplicó su número alcanzando a más del 20% de la sociedad argentina. Durante los últimos tres años, en Uruguay, el número de pobres aumentó un 60%. En casi todos los países centroamericanos, Bolivia, Ecuador y Perú las dos terceras partes de la población está por debajo de la línea de la pobreza. En México, Colombia y Venezuela, más de la mitad. Datos recientes, así como todas las proyecciones disponibles, revelan que durante el 2003 la situación no hizo sino empeorar en casi todos los países de la región (Cepal, 2003).

Como en cualquier lugar del mundo, en América Latina la pobreza siempre convive con la injusticia. La pobreza extrema lo hace con la injusticia extrema. No debe sorprender, por lo tanto, que, durante la década del noventa y los tres años subsiguientes, se haya observado, en

casi todos los países latinoamericanos, el estancamiento o el deterioro en la distribución del ingreso y de las riquezas acumuladas. El caso brasilero es paradigmático. En 1960, Brasil tenía un índice de Gini de 0,497; en 1970 éste había aumentado a 0,565; desde entonces ha oscilado entre 0,60 y 0,64.² En otras palabras, la desigualdad brasilera es hoy sólo menor que la registrada en países como Botswana, Sierra Leona y Namibia (IBGE, 2003; Carta Capital, 2003). En Chile, país de milagros económicos, la desigualdad social es una de las más altas de América Latina. A fines de los noventa, su índice de Gini era de 0,557, superior al de México, Ecuador y Paraguay (Cepal, 2003).

Para sobrevivir, el 70% de los hogares latinoamericanos dependen de ingresos generados por el empleo. Sin embargo, menos de la mitad de los trabajadores están protegidos contra la pérdida de su puesto de trabajo, realidad que se agrava en un escenario de creciente desempleo y pérdida progresiva de la cobertura legal de los trabajadores, como producto de las reformas laborales implementadas en los años noventa. Los que no tienen empleo son pobres. Y buena parte de los que lo tienen, también. Uno de cada dos latinoamericanos con empleo percibe un salario que le impide superar la línea de la pobreza (BID, 2003). Muchas veces se afirma que esto es así porque América Latina tiene un muy expandido y precario sector informal. La cuestión, sin embargo, parece ser más compleja. El propio sector formal, al igual que el informal, es muy desigual y genera, en numerosas ocasiones, injusticias profundas tales como la falta de protección, la disparidad salarial entre trabajadores calificados y no calificados y la discriminación sexual, étnica y racial.

“Los mercados laborales de América Latina presentan serios problemas. El desempleo ha llegado a su nivel más alto y aunque los salarios han mejorado en algunos países, lo han hecho a un ritmo muy lento. Los ingresos de muchos trabajadores son demasiado bajos como para permitirles escapar de la pobreza, y la desigualdad salarial —que se sitúa entre las

2. El índice de Gini es uno de los indicadores más frecuentemente utilizados para medir la desigualdad social. Cuando es igual a 0, la distribución del ingreso es perfectamente igualitaria; cuanto más se aproxima a 1 dicho indicador, más injusta y concentrada es dicha distribución. Suecia, Japón y Finlandia tienen un índice de Gini de 0,25. Namibia, de 0,70.

mayores del mundo— no está mejorando. Por el contrario, los salarios de los trabajadores no calificados han disminuido en relación con los trabajadores calificados.”

La cita precedente no corresponde a ninguna central sindical latinoamericana sino al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en su último Informe sobre el Progreso Económico y Social (IPES), con una sinceridad que bordea la esquizofrenia (o el cinismo), afirma que “las reformas estructurales de los noventa no produjeron los cambios previstos en el mercado laboral” (BID, 2003).³

Los procesos de “modernización económica” reforzaron el papel que los estados latinoamericanos casi siempre han jugado en beneficio de los sectores más ricos, promoviendo una progresiva transferencia de la riqueza social a algunos grupos económicos nacionales y transnacionales, principales beneficiarios del proceso de privatización y desregulación que han vivido estos países durante las últimas dos décadas. Un proceso de “modernización” que en nada ha cambiado el escenario de discriminación y segregación padecido por los sectores populares, urbanos y rurales, en el territorio continental. En el año 2000, casi 60 millones de latinoamericanos y caribeños se encontraban en situación de inseguridad alimentaria o pasaban hambre. En algunos países, como Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, casi un cuarto de la población sufre hoy algún grado de subnutrición.

Ser pobre en América Latina significa enfrentar un sinnúmero de dificultades y sufrimientos cotidianos. Ser pobre y ser mujer significa multiplicar, en algunos casos de forma exponencial, esas dificultades y sufrimientos. Son las mujeres quienes continúan hoy teniendo un acceso diferenciado a los mejores salarios, a los cargos más prestigiosos en el mercado de trabajo y en el campo político. Son las mujeres las que sufren las más brutales formas de violencia y segregación. En las zonas urbanas latinoamericanas, casi la mitad de las mujeres (45%) no tienen ingresos propios y dependen de la renta de sus compañeros, quienes, por su parte, como

3. Debe recordarse que el BID ha sido uno de los principales instigadores de los programas de ajuste estructural aplicados en América Latina durante los años ochenta y noventa, cuestión de la cual los autores del IPES 2003 parecen no haberse dado por enterados.

mencionábamos, suelen no disponer de protección ante la pérdida de empleo. Esto vuelve a la mujer mucho más vulnerable en caso de abandono o viudez y, de cierta forma, condiciona su autonomía ante la decisión de enfrentar una ruptura matrimonial. En la década del noventa, la tasa de desempleo masculino se incrementó en un casi 3%, la de las mujeres en más del 6%. A las discriminaciones sociales se suma la fuerte y persistente discriminación de género, tal como revela el siguiente cuadro.

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES POR NIVEL DE INGRESO

	10% más rico	30% más pobre
Educación de los hombres (en años)	12,1	5,0
Educación de las mujeres (en años)	11,6	4,7
Participación laboral (masculina)	85,8%	82,5%
Participación laboral (femenina)	60,9%	36,7%
Número de niños y niñas	1,4	3,2
Logro educativo esperado para sus hijos (en años)	11,7	6,9

Fuente: BID, 1999, pág. 61.

Por otra parte, la discriminación de género se asocia y articula a otras formas de segregación que, a pesar de su evidencia, suelen tornarse invisibles para buena parte de las sociedades latinoamericanas. Es el caso de las múltiples formas de discriminación étnica y racial que históricamente han desintegrado y negado los derechos humanos de millones de latinoamericanos y latinoamericanas y que, más allá de tímidos avances, persisten aún hoy. En el 95% de los casos, pertenecer a un pueblo originario o ser afro descendiente significa, en América Latina, ser pobre o muy pobre. Los pueblos indígenas y la población negra enfrentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y, cuando ingresan, reciben salarios significativamente menores; poseen menos años de escolaridad que la población blanca, aún cuando ésta es, en algunos países, un grupo étnico minoritario; sufren más la violencia y la arbitrariedad represiva de la policía y

del ejército, especialmente cuando son jóvenes; son más fácilmente reclutados por las mafias que controlan el comercio de las drogas que luego consumen los ricos o sus hijos; permanecen, cuando entran, mucho menos tiempo en el sistema escolar; poquísimos de ellos tienen acceso a la universidad; poquísimos ocupan cargos legislativos o son ministros; poquísimos son jueces, y poquísimos son ejecutivos o dirigentes de las grandes empresas que controlan el poder económico, político y social en las pequeñas, frágiles y degradadas democracias latinoamericanas.

¿La educación puede salvar a América Latina?

Frente a este cuadro de horrores, suele escucharse, tanto dentro como fuera de América Latina, que sólo la educación salvará a nuestros países del infortunio y la desesperación. La afirmación es, sin lugar a dudas, relevante y merece ser considerada seriamente.

En efecto, algunos de los países latinoamericanos más pobres enfrentaron, durante la década pasada, una verdadera explosión de sus índices de escolaridad. Muchas de estas naciones todavía están lejos de alcanzar la universalización en el acceso a la escuela básica. Entre tanto, el grado de cobertura de la enseñanza primaria ya supera el 80% de los niños y niñas en edad escolar en cuatro de los más pobres países de la región: Honduras, Guatemala, Granada y Nicaragua. Aunque Brasil, por ejemplo, tiene menos del 70% de la población entre 15 y 24 años de edad con más de 6 años de escolaridad, posee casi el 96% de los niños y niñas en edad escolar matriculados en algún establecimiento educativo (Prie-Unesco, 2003). Siendo así, y de continuar estas tendencias, todo parecería indicar que, en poco tiempo, la crisis social latinoamericana estaría solucionada. Sin embargo, un balance más cuidadoso de lo ocurrido durante los últimos años evidencia un panorama más dramático y complejo:

1. Aunque los niveles de matriculación han alcanzado un significativo (y casi total) grado de cobertura, los sistemas educativos nacionales, en América Latina, han profundizado su dinámica histórica de segmentación y diferenciación, creando escuelas pobres para los pobres y ricas para los ricos.

2. Resulta claro que, en los países latinoamericanos, la educación parece demostrar una capacidad muy baja para garantizar que los pobres dejen de serlo. En estas naciones aumentan de forma significativa los años de escolaridad de las personas (lo que se hace más evidente entre los más pobres), pero la exclusión social aumenta y la desigualdad permanece o se amplía. Contra todos los diagnósticos que pueden escucharse sobre la materia, los pobres latinoamericanos tienen hoy más años de escolaridad y menos posibilidades de superar sus condiciones de pobreza (Gentili & Alencar, 2001).
3. El caso paradigmático es el de las mujeres. Ellas, como mencionamos, constituyen uno de los sectores más segregados, poseen los menores ingresos y son más discriminadas en el mercado de trabajo. Sin embargo, dentro de la población económicamente activa, en América Latina, las mujeres tienen más años de escolaridad que los hombres. Peor aún: la brecha salarial entre géneros es más acentuada a medida que aumenta la educación de las mujeres. “Si se observa que, en gran parte de los países de la región, las mujeres jóvenes con más de 10 años de estudio son una mayoría y que éstas también superan a los hombres entre los desocupados, se podría concluir que la mayor educación de las mujeres, especialmente la educación superior, no tiene el mismo retorno que para los hombres, es decir, no se traduce ni en igualdad de empleo, ni de ingresos para los mismos años invertidos en educación” (Cepal, 2003: 21 y 22).
4. En la discriminación de género, en los procesos de segregación étnica y racial, así como en casi todas las formas de desigualdad actualmente existentes, la educación parece ejercer un papel al menos limitado en la eliminación o disminución de las causas que producen la exclusión social. Los pobres no son pobres porque tienen una educación pobre sino, justamente, porque son pobres a ellos no les toca otra “suerte” que la de tener que conformarse con una educación pobre. Actualmente, hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce que, aunque la desigualdad en los ingresos refleja, de cierta forma, la desigualdad educativa, la escolaridad por sí sola no basta para resolver el problema de los bajos salarios que percibe la gran mayoría de los latinoamericanos y latinoamericanas (BID, 2003).

5. Hoy, más que nunca, resulta claro que, en América Latina, se ha escindido el derecho a la permanencia en la escuela del derecho a la educación. Aunque los niños y niñas más pobres puedan tener el derecho a la escolaridad, el derecho a la educación y al conocimiento (como un bien social y como un derecho humano) permanecen negados a las grandes mayorías, constituyendo, en muchos de nuestros países, un privilegio de quienes pueden pagar por esto (Gentili & McCowan, 2003).

El año que comienza nos abre enormes desafíos. Evidentemente, el desarrollo educativo es uno de ellos. Sin embargo, atribuir a la expansión de los índices de escolaridad, la única expectativa capaz de garantizar mejores niveles de justicia social en nuestros países, puede ser una peligrosa trampa. Una trampa que acabe culpabilizando a la ya castigada escuela pública y a sus trabajadores, de una realidad que, aunque ellos cotidianamente sufren, no han producido ni pueden de forma aislada y prometeica solucionar.

Sin desconsiderar el inacabable índice de desafíos que nos presenta cualquier agenda social para avanzar en la democratización inconclusa de América Latina, una cuestión parece insoslayable: el fin del ciclo de reformas estructurales que propuso el neoliberalismo sólo se hará efectivo si los gobiernos latinoamericanos cambian radicalmente el rumbo de sus políticas económicas, principal obstáculo para una democratización efectiva de nuestros países. Hacerlo no es una cuestión meramente técnica. Se trata de una exigencia ética. Supone valores y principios democráticos, hoy ausentes en buena parte de las administraciones gubernamentales latinoamericanas. Significa aceptar que queremos vivir en un mundo donde los derechos de las grandes mayorías no pueden depender de la suerte, del clientelismo estatal, de la solidaridad ajena o de la generosa congoja que suele invadirnos las noches de Navidad.

CAPÍTULO III

La investigación educativa y los dilemas del poder

Cuando me invitaron a presentar una ponencia sobre este importante tema, pensé realizar una breve exposición sobre ciertas cuestiones metodológicas que nos preocupan especialmente en el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas del Laboratorio de Políticas Públicas.⁴ Preocupaciones éstas derivadas de un trabajo de investigación educativa quizás poco convencional, llevado a cabo con la participación de sindicatos docentes y orientado a la producción de conocimiento científico por parte de aquellos sujetos que están cotidianamente en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, particularmente en el campo educativo. Pretendía así referirme a una investigación que realizamos recientemente con diferentes organizaciones sindicales del magisterio latinoamericano, sobre las reformas educativas en los países del Cono Sur.

Sin embargo; cuando ya tenía todo preparado y estaba llegando a Buenos Aires, tuve la tristísima noticia de saber que había muerto la persona que fue mi más querida maestra y educadora durante mi formación universitaria en Argentina: Cecilia Braslavsky. Desde hace días, no dejo de pensar en lo que ha significado para mí la experiencia de trabajo con Cecilia, allá por los años ochenta. Gracias a ella y por ella me inicié en la investigación educativa.

4. El presente texto tuvo su origen en mi participación en una mesa redonda sobre investigación educativa promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en abril de 2005.